

C.A. de Santiago

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y OÍDOS LOS INTERVINIENTES:

En proceso RUC N° 2200527685-7 / RIT N° 175-2024 del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veinticuatro, las magistradas Urrutia Cornejo, Galán Villegas y Palacios Vera, en lo pertinente, resolvieron condenar a don **Rosendo Javier Bobadilla Ávila**, cédula de identidad nacional N° 15.794.747-8; y a doña **Betzabé Marina Ávila Rebolledo**, cédula nacional de identidad N° 8.519.888-2, a sufrir la pena corporal efectiva de siete años presidio mayor en su grado mínimo y diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, respectivamente, además de las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la sanción y pago de 400 U.T.M., como autores del delito consumado de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tipificado en el artículo 3° de la Ley N° 20.000, perpetrado en la comuna de Pudahuel el 7 de diciembre de 2022.

En contra de esta decisión, las defensas de ambos acusados dedujeron recurso extraordinario de nulidad por el motivo previsto en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, *“Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”*, por cuanto estima la defensa de Bobadilla Ávila que debieron calificarse jurídicamente los hechos como delito de tráfico de pequeñas



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JBBHXSPLUHK

cantidades de drogas del artículo 4° de la Ley N° 20.000; y la defensa de Ávila Rebolledo que debió ser absuelta.

Asimismo, la defensa de Bobadilla Ávila, alegó, en subsidio, el error de derecho de no aplicar, a su respecto, la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal regulada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, a saber: colaborar sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos, lo que ha afectado sustancialmente lo dispositivo del fallo, concretamente el *quantum* de la pena corporal.

La defensa de Bobadilla Ávila solicitó que se invalide la sentencia por la causal ya indicada, dictándose una de reemplazo, en que se modifique la extensión de la condena del acusado a una pena corporal en un rango entre 541 días de presidio menor en su grado medio y 5 años de presidio menor en su grado máximo.

En cambio, la defensa de Ávila Rebolledo pidió que se invalide la sentencia por la única causal invocada, dictándose una de reemplazo, en que la absuelva de los cargos.

El 7 de enero de 2025 se procedió a la vista del recurso, oportunidad en que concurrieron y alegaron por y contra el recurso los respectivos intervinientes. Concluida la audiencia, se fijó la audiencia del día de hoy para la comunicación de la sentencia.

CONSIDERANDO:

I En cuanto al motivo común invocado por ambas defensas

PRIMERO: Los recurrentes alegaron la causal contra de la sentencia prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, consistente en pronunciar el fallo habiendo efectuado una



errónea aplicación del derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

La defensa de Bobadilla Ávila estima que el error consistió en calificar los hechos punibles atribuidos como tráfico ilícito de drogas (artículo 3° de la Ley N° 20.000), en circunstancias que lo que procedía era apreciarlos como tráfico de pequeñas cantidades de drogas (artículo 4° de la Ley N° 20.000), por estar frente a una simple venta al menudeo, en pequeñas dosis de \$1000, y en consideración al contexto socioeconómico del imputado.

La defensa de Ávila Rebolledo, en cambio, le asigna el error de derecho en la convicción adquirida del tribunal sobre su responsabilidad penal en los hechos de la acusación.

SEGUNDO: La sentencia definitiva, en su Considerando Décimo, dio por acreditado que *“El día 7 de diciembre de 2022, a eso de las 16:00 horas, funcionarios policiales de la Brigada de Investigación Criminal de la comuna de Pudahuel, diligenciaron órdenes de entrada y registro emanadas del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, con objeto de poder dismantelar una organización familiar dedicada a la venta de drogas a los adictos de la comuna de Pudahuel.*

En primer lugar, se ingresó al inmueble ubicado en pasaje Villarrica N°1452, comuna de Pudahuel, lugar de venta de droga, donde se detuvo a BETZABÉ MARINA ÁVILA REBOLLEDO, quien había sido sindicada e investigada como líder de este clan familiar.

En dicho inmueble se incautó la siguiente droga, la que la acusada mantenía y poseía para su posterior comercialización, encontrándose esta dosificada en 162 envoltorios, correspondiente a 26,08 gramos de peso bruto de cocaína base;



6,97 gramos de peso bruto de clorhidrato de cocaína; y 89,33 gramos de peso bruto de cannabis sativa. Además, se encontraron en el inmueble, dos cartuchos calibre .380 y 9 mm.

En el mismo lugar fue detenido también GONZALO ALEJANDRO VARGAS BOBADILLA, nieto de BETZABÉ, quien también participaba de la venta de droga, y en su habitación se incautaron 193 envoltorios de pasta base de cocaína, con un peso bruto de 99,23 gramos, los que mantenía para su posterior comercialización.

Paralelamente, funcionarios policiales ingresaron al inmueble ubicado en pasaje Budi N° 8639, comuna de Cerro Navia, domicilio asociado a BETZABÉ pues era utilizado como lugar de acopio de droga. En dicho domicilio se detuvo a ROSENDO BOBADILLA ÁVILA, hijo de BETZABÉ, quien custodiaba el lugar, abastecía a su madre, y donde se incautó la siguiente droga, que guardaba, mantenía y poseía para su posterior comercialización y distribución: 465,08 gramos de peso bruto de cannabis sativa; 123,06 gramos de peso bruto de clorhidrato de cocaína y 7 plantas de cannabis sativa; además se incautó la suma de \$87.350, producto de la venta de la droga.

Finalmente, funcionarios policiales ingresaron al inmueble ubicado en pasaje Peñuelas N° 9418, comuna de Pudahuel, en donde se incautó una pistola de fogueo adaptada para el disparo y 33 cartuchos calibre .380, 23 de los cuales se encontraban adaptados; además se encontró en dicho domicilio 304,88 gramos de peso bruto de pasta base de cocaína, y la suma de \$196.000”.

Los hechos descritos fueron configurados únicamente como tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sancionados en el artículo 3° de la Ley N° 20.000,



correspondiéndole a los tres encausados la calidad de autores del delito consumado.

TERCERO: Como puede advertirse, dicho núcleo fáctico fijado por el tribunal adjudicador, congruente con los hechos descritos en la acusación fiscal, estableció expresamente que los acusados -familiares que actuaban como clan- poseían pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y de marihuana, dosificada mediante contenedores de distintos materiales, la que almacenaban en diversos lugares cerrados para ser luego ser comercializada, enunciados fácticos que esta Corte no puede modificar mediante la causal de nulidad de fallo invocada por las defensas, cuyo único objetivo es velar por la correcta aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico vigente.

CUARTO: Resulta útil recordar que el recurso de nulidad es un medio de impugnación de la sentencia, de derecho estricto, excepcional y circunscrito a los motivos especificados en la ley, que en la presente alegación está centrado en la participación de una autora y en la calificación jurídica de los hechos dados por acreditado en el caso de otro autor, con incidencia, por tanto, en la condena y determinación de la pena corporal, respectivamente.

QUINTO: Siendo así, a esta Corte le está vedada analizar la prueba rendida en el juicio, a fin de determinar las acciones de los imputados, debiendo evaluar simplemente si hubo una correcta calificación jurídica acorde con los hechos establecidos por el tribunal adjudicador, razón por la que debe rechazarse de entrada la alegación de la defensa de Ávila Rebolledo.

Al efecto del reclamo de la defensa de Bobadilla Ávila, debe enfatizarse que no siendo la distinción entre el tráfico y microtráfico ilícito de drogas de carácter normativa sino regulativa, que debe apreciarse por el adjudicador conforme a



consideraciones contextuales, las que se construyen con elementos, factores y criterios como la cantidad de droga (más de medio kilo de marihuana, 400 gramos de pasta base de cocaína, 130 gramos de clorhidrato de cocaína y 7 plantas de cannabis sativas), la variedad y naturaleza de éstas (clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y cannabis sativa), su dosificación (más de 350 contenedores de distinto material), además de la dispersión de hallazgos (tres casas) por almacenamiento y posterior venta por parte de una agrupación familiar, todos los cuales permitieron concluir que no estamos frente a una venta menor de drogas blandas a los compradores finales sino de una operación de mayor entidad con significativa afectación de la salud pública (*ratio legis* se determina en base al grado de lesividad del bien jurídico). Todo esto, sin perjuicio, que también se incautó un arma de fuego, municiones y bastante dinero efectivo en dichos inmuebles.

SEXTO: En consecuencia, esta Corte no visualiza un error de aplicación ni interpretación de los artículos 3° y 4° de la Ley N° 20.000, no justificándose los vicios de derecho alegados, que hayan influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al punto de ameritar la modificación de las condenas o extensión de una pena corporal supuestamente superior a la que legalmente corresponde imponer.

II En cuanto al motivo invocado en subsidio por la defensa de Bobadilla Ávila

SÉPTIMO: La recurrente, en subsidio, alegó como causal del recurso deducido en contra de la sentencia, la misma que la principal, pero por no dar por establecida la circunstancia minorante de responsabilidad penal del artículo 11 N° 9 del Código Penal, como en el caso del condenado Vargas Bobadilla,



no obstante haber colaborado Bobadilla Ávila, renunciando a su derecho a guardar silencio y reconociendo los hechos, tanto la venta como la ubicación de la droga, que los persecutores no conocían previamente, no habiendo el Ministerio Público producido en forma independiente prueba múltiple y grave al respecto.

OCTAVO: En la fijación de la pena exacta, el tribunal efectivamente debe tener en consideración, primeramente el número y entidad de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, así como la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, factor asociado a las repercusiones y consecuencias culpables del ilícito, extratípicas y objetivamente imputables al comportamiento típico del condenado.

Sin embargo, no se aprecia que esta regla de carácter general no haya sido respetada por las juezas del grado, quienes adjudicaron la extensión de la pena corporal, con arreglo a los criterios estipulados en el Código Penal.

En efecto, estaba justificado que no se diera por acreditado respecto del sentenciado Bobadilla Ávila, la circunstancia atenuante de responsabilidad penal de colaborar sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos, toda vez que no se advierte de su parte un aporte de significativo, relevante y determinante a los antecedentes ya reunidos de la investigación criminal.

Por el contrario, a diferencia de del sentenciado Vargas Bobadilla, al no haber reconocido la venta de drogas no contribuyó de modo alguno al esclarecimiento de los hechos, habiendo sido detenido en situación de flagrancia en posesión de toda la evidencia material necesaria para acreditar su participación en el juicio, sin perjuicio de que su declaración se produjo recién ante los jueces de fondo, sin haber servido para



acelerar los tiempos de la investigación ni reducir los costos asociados al juicio.

NOVENO: En consecuencia, no existiendo una errónea aplicación ni interpretación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, sino tan solo una discrepancia en relación a la existencia de la situación de hecho constitutiva de la circunstancia atenuante reclamada, también se rechazará el recurso deducido en este acápite.

Y en virtud, además, de lo dispuesto en los artículos 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechazan**, los recursos de nulidad deducidos por don Andrés Morales Soza y don Gustavo Zeballos Marín, abogados defensores particulares, en representación de los condenados don Rosendo Javier Bobadilla Ávila y doña Betzabé Marina Ávila Rebolledo, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veinticuatro, en los autos RUC N° 2200527685-7 / RIT N° 175-2024 del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y en consecuencia, se declara que dicho fallo no es nulo.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción del Ministro (I) señor Guzmán Fuenzalida.

No firma la Ministro señora Merino Guzmán, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal.

N°Penal-6947-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JBBHXSPLUHK

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Fernando Guzman F. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JBBHXSPLUHK